

Violencia y Campesinado

ALBERTO FLORES GALINDO
NELSON MANRIQUE



INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

Violencia y Campesinado

ALBERTO FLORES GALINDO
NELSON MANRIQUE



INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

LIB. RICARDO PALMA
CAMANA 980 A
LIMA

INDICE

- 5 Democracia y campesinado indígena
en el Perú contemporáneo
Nelson Manrique
- 17 La guerra silenciosa
Alberto Flores Galindo

© Instituto de Apoyo Agrario

© Nelson Manrique y Alberto Flores Galindo

Carátula: Margarita Ramírez

Producción Gráfica: Tomochi Sumida y Juan Toribio N.

LIBRERÍA RICHARDO PALMA
CAYMA 280
LIMA

DEMOCRACIA Y CAMPESINADO INDIGENA EN EL PERU CONTEMPORANEO

Nelson Manrique

EL PERU contemporáneo presenta uno de los panoramas políticos más complejos del continente. En nuestro país coexisten hoy en un mismo espacio la guerrilla más fuerte de América del Sur, la izquierda legal de mayor presencia política —la Izquierda Unida— y el partido reformista históricamente más importante del continente en el poder: el APRA. Contribuye a singularizar la situación el hecho de que éste no parezca un precario equilibrio, capaz de romperse en el corto plazo. Tal estado sólo es comprensible si se parte de que la sociedad peruana presenta un alto grado de desarticulación. Queremos explorar algunas dimensiones de este fenómeno.

Desde mayo de 1980 el Perú vive una guerra no declarada entre una organización insurgente, el Partido Comunista del Perú "Sendero Luminoso", y las Fuerzas Armadas, que a la fecha ha dejado como saldo más de siete mil muertos. Pese a una gran cantidad de desmentidos oficiales, las denuncias de organismos internacionales de reconocida imparcialidad sobre graves violaciones de los derechos humanos en la lucha antiterrorista se han multiplicado. Demás está señalar que la gran mayoría de caídos son ajenos a la contienda. Se trata, fundamentalmente, de humildes campesinos andinos, cuya condición histórica de marginados en la sociedad peruana los ha convertido en víctimas de un enfrentamiento en el cual, sin que se considere para nada su opinión e intereses, han terminado cogidos entre dos fuegos.

La situación descrita no es, por desgracia, excepcional en nuestro torturado continente. Hay, sin embargo, algunos elementos específicos derivados de la forma como se plantea la cuestión nacional en el Perú que creemos deben considerarse para alcanzar una visión correcta del drama que hoy vive el país.

I

Un primer elemento a destacar es el hecho que, a diferencia de lo acontecido en otros países en que se vive una situación similar, en este caso el brote insurgente y la consiguiente respuesta represiva se vienen desarrollando en una coyuntura de institucionalidad democrática. El accionar del P.C. del P. "Sendero Luminoso" se inició cuando terminaba la dictadura del general Morales Bermúdez, y el grueso de los enfrentamientos se han desarrollado durante la pasada administración —surgida de comicios democráticos— del arquitecto Fernando Belaúnde. Este gobierno se caracterizó por ser uno de los más entreguistas de los que el país tenga memoria, y la respuesta que dio al desafío insurgente fue coherente con su naturaleza: en lugar de afrontar la cuestión de fondo, expresada en la existencia de graves problemas estructurales, que hacen de la zona donde la insurrección se inició una de las más deprimidas dentro del país, con niveles extremos de miseria, prefirió declinar su responsabilidad, transfiriendo el comando político militar de la "zona de emergencia" a las Fuerzas Armadas. En lugar de asignar recursos para atender al desarrollo de esta zona tradicionalmente abandonada por el Estado peruano, optó por responder estrictamente en el terreno represivo, atribuyendo el levantamiento a la consabida "agresión externa" de potencias empeñadas en mellar, a través de la acción de "malos peruanos", la imagen de una democracia autocomplacientemente calificada de "ejemplar". Esta versión oficial no encontró ningún asidero, pues pese a los esfuerzos desplegados para probar alguna vinculación entre los insurgentes y los países socialistas, todas las tentativas encaminadas en esa dirección fracasaron; sin embargo, la estrategia antisubversiva basada en la pura represión militar se mantuvo, lo que otorgó a los alzados en armas una base social entre el campesinado de la región, de la que inicialmente carecían.

La otra línea de actuación del anterior gobierno estuvo dirigida a tratar de acallar las voces que se levantaron denunciando el genocidio que se venía perpetrando contra las comunidades campesinas indígenas de la región, acusando a quienes hicieron tales denuncias de "antipatriotas", de tratar de mellar la buena imagen de "las instituciones tutelares de la patria", y de hacerle el juego a los senderistas —cuando no se les acusó de senderistas embozados—. La crueldad ejercida por este grupo indiscriminadamente también contra la propia población campesina a la que decían representar, debiera justificar, al parecer, según este razonamiento, el recurso al igualmente indiscriminado terrorismo de Estado.

El final del régimen de Belaúnde y el resultado de las elecciones realizadas este año crearon notables expectativas con relación a la posibilidad de un cambio radical en la situación. En primer lugar, el grado de abstención electoral fue uno de los más bajos de la historia electoral del país. Esto representó un duro golpe para la imagen de vanguardia política popular de Sendero Luminoso, cuya consigna fue la de boicotear el "carnaval electoral". Es de señalar que no sólo el ausentismo sino también el número de votos viciados y en blanco fue notablemente bajo. En segundo lugar, el repudio a la política de la pasada administración fue igualmente contundente: el candidato oficialista alcanzó apenas el 6% de los votos, frente al 45% obtenido por Belaúnde en 1980. En tercer lugar, las fuerzas de oposición alcanzaron más de las dos terceras partes de la votación, erigiéndose como partido gobernante el APRA con aproximadamente la mitad de la votación total —el más alto grado de apoyo nunca antes alcanzado por partido alguno—, y la Izquierda Unida como principal fuerza de oposición. La derecha tradicional fue, pues, contundentemente golpeada.

Una interrogante fundamental que se planteó al asumir el APRA el gobierno fue la manera en que enfrentaría el desafío insurreccional, problema que se hacía tanto más importante por el anuncio de Sendero Luminoso de que no modificaría su política de beligerancia contra el gobierno y porque se sabía que no existía en el partido gobernante consenso sobre el tratamiento que se debía dar a esta delicada cuestión.

El descubrimiento de una nueva fosa común en Pucayacu, así como la denuncia de una masacre realizada en Accosmarca por efectivos de las fuerzas de seguridad, a las que se sumaron después nuevas denuncias sobre otras masacres en Bellavista y Umaru a pocas semanas de asumir Alan García el poder, volvieron a poner a la orden del día el debate sobre la naturaleza de la guerra que hoy se libra en el país. Un connotado jefe militar optó por atribuir la culpa de lo sucedido a un oficial, que habría cometido un "error humano" —la cobarde matanza de inermes ancianos, mujeres y niños— que no comprometía la responsabilidad de las FF.AA. El gobierno de Alan García reaccionó, sin embargo, con medidas que fueron unánimemente respaldadas por el país. Fueron removidos de sus cargos el jefe del Comando Conjunto (1) y los dos responsables de la conducción de las acciones militares en la zona. Por su parte, el ejército responsabilizó de las acciones a personal subalterno, que supuestamente habría actuado por iniciativa individual, contra las directivas emitidas por el comando.

En el enjuiciamiento de la realidad que estas denuncias han vuelto a poner sobre el tapete entendemos que está en cuestión no la responsabilidad de uno o varios individuos, ni siquiera la de las instituciones militares en general, sino una política global de pacificación: la *guerra sucia* con que se pretendió encarar el desafío insurreccional, demostrando que siempre es posible desplegar mayor salvajismo que el adversario.

II

Las políticas de contrainsurgencia que hoy se aplican en el Perú son creación de potencias imperialistas, que las utili-

(1) Es de señalar que existía una contradicción anterior que creemos ha debido jugar algún papel en la decisión presidencial. Esta se originó en la denuncia de la realización de maniobras bélicas conjuntas de las FF. AA. peruanas y cuerpos represivos norteamericanos en el oriente peruano, las cuales no habían sido consultadas, y ni siquiera informadas, al presidente de la República, pese a que constitucionalmente éste es el jefe supremo de las FF.AA. Estaba de por medio, pues, un problema de fondo, aún no resuelto, cual era el de la definición de la relación a establecerse entre el poder civil y el poder militar en el Estado, en un país con una fuerte tradición militarista.

zaron para tratar de frenar las luchas de liberación nacional que signaron el proceso de descolonización vivido en Africa y Asia en la última postguerra, desde su creación por el ejército francés en su lucha contrarrevolucionaria en Vietnam y Argelia, hasta su depuración y perfeccionamiento por las fuerzas norteamericanas, que se encargaron de difundirlas como doctrina de guerra entre los ejércitos del continente. Estas políticas eran originalmente coherentes con la naturaleza de las fuerzas que las implementaban: se trataba de ejércitos de ocupación que intentaban perpetuar por la violencia un orden basado en la sumisión de vastas masas sociales al poder de minorías coloniales extrañas al país, extranjeras.

El carácter de *ejércitos de ocupación* de las fuerzas militares coloniales explica en buena medida el salvajismo con que éstas se comportaron frente a la población local, más aún cuando consideraban a esta "inferior", incluso biológicamente (2). Pero precisamente esta actitud permitió a los insurgentes convocar a las más amplias fuerzas sociales en una cruzada por la salvación nacional. Y fue el éxito alcanzado en impulsar semejante movilización lo que condenó a la derrota a una doctrina que, después de haber cosechado fracasos en todo el mundo, viene hoy a ser propuesta en el Perú como la solución al "problema senderista".

La "guerra sucia" es condenable no solamente por su barbarie, sino también por su ineficiencia como medio de pacificación. Para demostrarlo está la experiencia de su aplicación en otras latitudes. Pero también la historia peruana tiene ejemplos que muestran hacia qué callejón sin salida se dirige.

III

La sierra central del Perú, y particularmente la región de Ayacucho, donde se ha originado el fenómeno senderista, fueron escenario, durante el siglo pasado, de la incursión de

(2) Un depurado análisis de la justificación "científica" de tal inferioridad en los colonizados argelinos, por reputados médicos franceses ligados a la opresión colonial, es desarrollado por Frantz Fanon en *Los condenados de la tierra*, FCE, México, 1973, pp. 271-287.

un ejército de ocupación. En octubre de 1883, durante la guerra del Pacífico, las fuerzas chilenas del comandante Urriola arribaron a la región persiguiendo al general Cáceres, el héroe de la resistencia popular, quien se había replegado hasta Andahuaylas. Los testimonios históricos muestran con amplitud cuán profundamente hirió a los pueblos la ocupación, con su secuela de abusos contra la población. La reacción fue la esperable: una vasta movilización popular armada, que arrojó fuera de la región al ejército ocupante y que se ha incorporado a la historia patria como la gesta de la resistencia campesina.

Podría argumentarse que la situación de hoy es cualitativamente distinta, porque actúa en la región un ejército nacional y no uno de ocupación. Sin embargo, es imprescindible discutir hasta qué punto el comportamiento de las fuerzas militares que hoy ocupan la zona de emergencia es distinto del mostrado por las fuerzas extranjeras de ocupación, y, lo que es aún más importante, hasta qué punto no son percibidas como tales por la población afectada.

IV

Las fuerzas militares hoy destacadas a Ayacucho, y en general a toda la zona de emergencia, que abarca varios departamentos serranos con una densa población indígena quechua-hablante, están conformadas mayoritariamente por individuos ajenos a la región. Muchos de los movilizados desconocen el quechua y, particularmente, en lo que a tropas de élite se refiere, buena parte de sus integrantes son de procedencia costeña y selvática, habiendo sido inmersos por la guerra en un mundo cultural que no comprenden, que les resulta ajeno, hostil y amenazador.

Naturalmente, estos sentimientos no son exclusividad de los recién llegados. Al prejuicio antiserrano del costeño se opone el prejuicio anticosteño del serrano, y la propia situación que hoy se vive contribuye a reforzar esta atmósfera de recelo y pugnacidad. Aun en los lugares donde la barbarie de la guerra sucia no se ha hecho sentir con particular crudeza, como en algunas ciudades de la zona de emergencia, la presencia de las nuevas guarniciones militares viene provocando graves trastornos.

Hay particularmente un hecho que hiere profundamente a los pueblos. Este es el efecto corruptor que la presencia de las tropas acantonadas ejerce sobre su sociedad. En zonas sumamente pauperizadas, la presencia de oficiales, policías y soldados con ingresos muy por encima de los imperantes en la región estimula la prostitución. Sociedades fuertemente tradicionales ven dislocarse los valores morales que hasta hace poco eran norma inquebrantable. La propia economía local resulta gravemente distorsionada, luego de la depresión general provocada por la guerra, con su secuela de inestabilidad general, paralización de actividades como el turismo, que era muy importante para Ayacucho, y migraciones masivas de quienes intentan escapar del escenario del conflicto armado. La economía local se orienta ahora crecientemente a satisfacer la demanda del nuevo mercado, representado por el consumo de los militares acantonados en la región. Ha aparecido un nuevo fenómeno social; la presencia de las *rufitas*: muchachas fácilmente prostituibles por algo de dinero, diversión o, incluso, ropa.

Las fuerzas militares se retirarán un día de la zona de emergencia, pero los trastornos provocados por su presencia no podrán borrarse con la misma facilidad.

El fenómeno descrito expresa un problema mucho más de fondo: la misma situación se vivió en todos aquellos lugares donde coexistieron un ejército de ocupación y una población nativa pauperizada. La salida de las tropas norteamericanas del sudeste asiático planteó a las fuerzas revolucionarias triunfantes un grave problema social, por la secuela de corrupción que aquellas dejaron tras de sí. Precisamente fue la corrupción imperante en la capital de Camboya una de las "razones" en la que halló su justificación la furia homicida de Pol Pot y los *kmher rouges* en el poder.

La situación adquiere caracteres siniestros en las zonas rurales, que constituyen el teatro bélico de operaciones. La población indígena a lo más ha alcanzado un estatus de ciudadanía de segundo orden. El abismo étnico que separa a los indios de los no-indios es reforzado por un profundo racismo, al cual no son ajenos los soldados destacados a cumplir

misiones de combate. Añádase la tensión que supone la lucha contra un enemigo invisible (una de las armas con las que cuenta la guerrilla para desgastar a las fuerzas gubernamentales) y los prejuicios de los no-indios, que atribuyen "doblez", "hipocresía" y "falsedad" a los indígenas. Combínese todo esto, finalmente, con las enseñanzas asimiladas en las escuelas de contrainsurgencia norteamericanas — las mismas que formaron a los genocidas hoy sentados en el banquillo de los acusados en Argentina—, que revisten la lucha contrarrevolucionaria con el ropaje de un enfrentamiento contra una "agresión externa", lo que convierte automáticamente a todo presunto guerrillero o a aquellos de quienes se sospecha los apoyan, en *extranjeros*, aun cuando su filiación indígena no ofrezca dudas. Así tenemos el cuadro completo para comprender hasta qué punto las fuerzas destacadas en la zona terminan comportándose como un auténtico ejército de ocupación.

El racismo es un cáncer que afecta no sólo a las fuerzas militares sino a la sociedad peruana toda. Dos detalles, ligados a la masacre de Uchuraccay, permiten mostrarlo. Uno de ellos es la anodante diferencia de escala en la forma cómo esta tragedia conmovió a la opinión pública, con relación a la escasa atención que se prestó a la muerte de cientos de indígenas que, antes y después, encontraron muertes iguales o aun más bárbaras. En segundo lugar, es de señalar que la reacción generalizada en amplios sectores de la población frente a la noticia fue el resurgir de opiniones brutalmente racistas, bien representadas en el titular que un diario de gran circulación puso en su primera plana, luego de que se informó que los periodistas habían sido masacrados por campesinos indígenas: "¡BESTIAS!". Otro fenómeno sobre el cual debemos reflexionar es la escasa conciencia que existe entre la población peruana del grado de violencia hoy imperante en el país. Para un grueso sector de ella resultaría inverosímil la afirmación de que el Perú es hoy el país más violento de América del Sur. En ello, creemos, influye decisivamente el hecho de que las bajas indígenas no suelen ser igualmente valoradas que "las otras." El racismo afecta, pues, a toda la sociedad peruana. Hay un elemento, sin embargo, que diferencia el racismo (o, mejor, sus consecuencias sociales) de civiles y militares. Es-

te es la impunidad que brinda a éstos el uniforme, para canalizar los sentimientos agresivos que aquél suscita, contra las poblaciones indígenas inermes.

Hay contenidos, inculcados en la psicología militar, que permiten entender la situación. De éstos el más importante es el menosprecio que la formación castrense cultiva sistemáticamente en la mentalidad militar, en relación con los civiles. El mayor (r) Víctor Villanueva ha escrito (3):

"El sentimiento de casta del oficial peruano ha sido fortalecido durante toda su existencia por una serie de mecanismos. El agachamiento de las instituciones civiles (. . .); el aislamiento social en que vive y le hace pensar que el cuartel es su mundo; el desprecio por el civil que se inyecta al soldado desde el primer día en que ingresa al servicio; el uniforme que viste, diferenciándolo de todos los demás grupos sociales, y que le confiere prerrogativas de que los otros carecen; el fuero privativo de que dispone y le permite, en muchas ocasiones, eludir a la justicia civil aunque de delitos comunes se trate; el ejercicio de la violencia, cuyo monopolio posee, que genera en muchos individuos sicosis de que los diarios dan cuenta frecuentemente; los beneficios económicos que le permiten sortear las épocas de crisis como la actual, y han de soportarla en todo su rigor los otros sectores sociales; el *status* institucional; en fin, tan diferente a las normas que rigen a las instituciones civiles y el hecho de pertenecer a una 'institución tutelar de la patria', conducen al militar a identificar sus propios intereses con los de la nación, aspectos todos que van conformando en la mente del soldado la conciencia de pertenecer a una clase superior, que en la praxis adquiere todas las características de casta".

Si bien el velasquismo representó para amplios sectores de las FF.AA. una experiencia inédita, que los sensibilizó no-

(3) VILLANUEVA, Víctor: 100 años del ejército peruano: frustraciones y cambios. Ed. Juan Mejía Baca, Lima, 1971, pp. 171-172.

tablemente en su relación con la sociedad civil, subsisten fuertes remanentes del sentimiento de casta al que alude el mayor Villanueva (sistemáticamente estimulados por quienes ven con malos ojos cualquier eventualidad de acercamiento entre los militares y los sectores populares), que no son patrimonio exclusivo de los oficiales, puesto que los mismos son transmitidos a los elementos de tropa.

• V

La constitución de fuerzas de "defensa civil", táctica utilizada por el ejército, que ha trasladado así el costo de la guerra a las poblaciones indígenas, se ha convertido en un vehículo que canaliza desquites entre comunidades cuyos enfrentamientos se remontan en muchos casos hasta rivalidades étnicas precolombinas. La región está constituida por un mosaico étnico sumamente fragmentado, fenómeno que tiene su origen en la propia naturaleza de la conquista incaica de ese territorio. Como en él los quechuas conquistadores encontraron una fuerte resistencia militar, optaron por reemplazar la mayor parte de la población originaria por grupos de mitimaes provenientes de territorios tan lejanos como Cusco y el actual Ecuador. Así, se instalaron grupos como los *tanquiguas, pabres, condes, huandos, quispihuaros, canaris, caxamarcas, huancas, jaujas, chachapoyas*, etc., llegando a emplazarse en un pequeño territorio hasta veintiún etnias diferentes, profundamente enfrentadas entre sí. Las *reducciones* que luego implementó el virrey Toledo hicieron aún más compleja la situación, al unir en núcleos político-administrativos únicos (de los cuales emergieron las actuales comunidades campesinas) a integrantes de etnias diversas.

No debe extrañar, pues, que hasta hoy subsistan fuertes contradicciones, que han encontrado un canal siniestro de expresión en los enfrentamientos alimentados por el encuadramiento que Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas han ejecutado entre las comunidades campesinas de la región. El resultado ha sido una guerra entre comunidades que no sólo desangra inconteniblemente a la población civil, sino que viene degenerando en el peor tipo de enfrentamiento: el bandolerismo, alimentado por la crisis productiva que la guerra ha

provocado en el agro y cuyo rasgo más temible es que se desarrolla por fuera de cualquier racionalidad.

El abismo étnico y el racismo a él asociado encuentra su más pernicioso medio de desarrollo en la guerra sucia. Si esto es reforzado por una garantía de impunidad, proveniente en primer lugar de la actitud de abstención de un Estado complaciente, que prefiere descargar en las FF.AA. su responsabilidad de promover el desarrollo, sustituyéndolo por una política de terrorismo de Estado, y de un comando militar que cree que es posible una derrota militar de la insurgencia mediante el recurso a la utilización sistemática del terror, los resultados serán los que están a la vista. No se trata de "errores humanos", sino de la aplicación consecuyente de una doctrina de guerra que debe ser definitivamente erradicada.

Según un rumor que la prensa ha preferido no profundizar, los soldados a los que se ha responsabilizado por la masacre de Pucayacu habrían sido sentenciados por la justicia militar a algunos días de suspensión, "por negligencia y abuso de autoridad". En el enfrentamiento en torno a la jurisdicción de la justicia civil y la militar para juzgar sobre estos hechos se ventilaba la real naturaleza de la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. El desenlace parece confirmar que continuamos frente a un poder civil autoconsciente de su rol de rehén del poder militar.

Finalmente, es necesario afrontar la lucha ideológica dentro del propio campo popular. *Mientras no tomemos conciencia de que el racismo también nos atañe, aquellos empeñados en dividir al pueblo tendrán un amplio margen de maniobra.*

LA GUERRA SILENCIOSA

Alberto Flores Galindo

DESDE 1980, en el Perú, a la par que se establece un régimen de democracia representativa, se despliega una inusual violencia política que al terminar 1984 arroja como resultado más de 4,500 muertos, 1,000 desaparecidos y un número similar de presos. El ritmo de los acontecimientos, que parece resumirse en la metáfora reiterada de "una espiral de violencia", lleva a que muchos piensen que no existe lógica alguna detrás de esas cifras, sino los malentendidos, el azar o la casualidad. La violencia política es interpretada como la expresión visible de una violencia más antigua y profunda, que caracterizaría desde siempre a la sociedad peruana. La violencia deja de ser, entonces, un objeto a ser explicado y se convierte en la explicación. Elevada al mundo de las abstracciones, desaparecen los actores y con ellos las víctimas y los victimarios. No hay responsables.

Pero hace falta volver atrás. Reabrir los periódicos y revistas de estos últimos años y reconstruir los acontecimientos tomando como hilo conductor a la cronología. Fechar. Leerlos como si fueran testimonios históricos: de hecho lo son.

La versión oficial sostiene que la violencia política tuvo un momento preciso de iniciación: mayo de 1980, cuando el grupo guerrillero Sendero Luminoso tomó el pueblo de Chuschi, en Ayacucho, en las proximidades del río Pampas, y quemó las ánforas dispuestas para las elecciones presidenciales que se realizaban ese día. Pero ahora se olvida que en los primeros meses las acciones de Sendero Luminoso no tuvieron ninguna víctima: interrupción de caminos, destrucción de puentes, vo-

ladura de torres eléctricas... Durante todo el año 1980 únicamente tres personas mueren en los 219 atentados atribuidos a S.L. En los dos años siguientes, las muertes se incrementan en 11 y 151 respectivamente. Para entonces se había producido la intervención de fuerzas policiales antiguerrilleras, la declaración de estado de emergencia en varias provincias y, de otro lado, los senderistas en el afán de imponerse autoritariamente en las zonas ocupadas por ellos, procedieron a ejecuciones de autoridades, abigeos, comerciantes o campesinos calificados como ricos.

Entre mayo de 1980 y diciembre de 1982, es decir, treintidós meses que van desde la ocupación de Chuschi hasta la intervención de las fuerzas policiales, las ejecuciones y actos terroristas de Sendero Luminoso, se constataron en todo el país 165 muertos y un número algo superior de heridos, 204, como correlato de la violencia política. Al año siguiente, 1983, los muertos se multiplican: 2,282 en doce meses, mientras los heridos apenas se incrementan muy levemente hasta un total de 372. Podríamos agrupar estas víctimas de la violencia separando de un lado a representantes del Estado y del otro a civiles. Los primeros son miembros de la policía, el ejército y autoridades; los segundos son aquellos que en los recuentos oficiales figuran como civiles y senderistas (o terroristas). Los juntamos porque un porcentaje imposible de determinar pero que se supone elevado, son considerados como tales sin mediar pruebas confiables. El año 1983 los muertos civiles eran 96.40%, mientras que los del Estado fueron 3.60%; los heridos civiles 61.60% y del Estado 38.41%, lo que muestra cómo la violencia contra el Estado mantuvo sus características (dejando heridos), mientras la violencia desde el Estado varió sustancialmente: no se quiere dejar heridos que puedan servir como eventuales testigos. Mientras en 1982, 19 heridos fueron considerados senderistas, en 1983 éstos bajan a 5, en tanto que los muertos calificados de senderistas pasan de 47 en 1982 a 1,398 al año siguiente. En 1984 el total de muertos es de 2,104. Entre ese año y el anterior (24 meses) se produjeron 4,386 muertes, 96% del total de bajas en cinco años de violencia política. (Ver Anexo). Es evidente que el cambio en las dimensiones de la violencia se produjo en 1983. ¿Qué pasó ese año?

En 1983 las muertes no empezaron gradualmente. En enero, 175 muertos; en febrero, 344; en marzo, 157; en abril, 466; en mayo, 67; en junio, 187....(1). La intensidad y el volumen de la violencia variaron casi automáticamente con el paso de uno a otro año. La explicación —si nos interesa— debemos buscarla entre fines de diciembre de 1982 y los primeros días del año siguiente. El 21 de diciembre un Decreto Supremo encarga a las Fuerzas Armadas el orden interno en Ayacucho y Andahuaylas. El 28 entra el ejército. A las provincias declaradas en estado de emergencia —Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo— se agregan Andahuaylas y Angaraes. El día 9 de enero, a orillas del Apurímac, aparece el cadáver de un profesor secuestrado en La Mar por “sinchis” (fuerzas antisubversivas de la Guardia Civil). Comienzan las detenciones y los “procesos” extrajudiciales. También los simulacros de fusilamientos. Durante ese año de 1983 se inauguran dos prácticas patentadas exclusivamente por el Estado y las fuerzas represivas: las desapariciones y las fosas clandestinas, llamadas en un expresivo neologismo “botaderos” de cadáveres, hoyos mal cubiertos en los que aparecían, amontonados, los muertos. Hay 245 casos de desaparecidos, denunciados por sus familiares, sobre los que se cuenta con documentos completos y absolutamente confiables. Para Amnistía Internacional existen más de mil casos hasta 1984. Pueden ser todavía más, teniendo en cuenta que muchos, por temor o por desconocimiento (campesinos analfabetos), no hacen los trámites pertinentes. Tener un desaparecido significa admitir dentro de una familia el virus del senderismo: estar apestados. Muchos de los cadáveres encontrados en los cementerios clandestinos tienen en común una bala en la cabeza, lo que indicaría que murieron ejecutados por una fuerza organizada; pero a veces los cuerpos han sido despedazados por cargas explosivas, quemados, o, en todo caso, la descomposición y el tiempo hacen imposible reconocerlos. El número real debe superar el cálculo excesivamente ponderado de 316 cadáveres. (Ver Anexo). Pero lo que nos interesa subrayar —antes que la cantidad— es el cambio sustancial en los

(1) Banco de Datos (DESCO). Aldo Panfichi me ayudó a recopilar esta información.

enfrentamientos producido después del ingreso de las Fuerzas Armadas.

Este cambio sustancial fue consecuencia de una nueva estrategia. Sendero Luminoso tenía sus bases de apoyo en las mismas comunidades: los guerrilleros se ocultaban entre los campesinos. Realizaban la metáfora de Mao: el pez en el agua. Había que envenenar el agua, contaminarla, hacerla intolerable para que no pudiera servir como refugio. No podía repetirse la estrategia seguida en 1965: aislar a la columna guerrillera y diezmarla, porque en 1983, en la región del Pampas o en Huanta, era imposible para un oficial del ejército peruano saber quién era un campesino y quién un subversivo. Entonces era necesario que asumieran uno de los términos en los que Sendero planteaba la guerra: la larga duración, la paciencia, la lucha prolongada. No servirían los helicópteros y las armas modernas de que estaba provisto el ejército. Es más: no era conveniente que el propio ejército o la marina asumieran directamente los enfrentamientos. Un ejército venido de fuera, con pocos oficiales quechua-hablantes, podía ser visto como una fuerza de ocupación extranjera. Mediante este razonamiento se llegó a una estrategia que implicaba ahorrar bajas militares y hacer reposar los costos de la guerra en la propia población civil. Llevar a campesinos, hacerlos formar en fila, vivir a la bandera y al ejército, darles alguna protección, ofrecerles cubrir ciertas necesidades inmediatas y lanzarlos contra los senderistas. Se los comenzó a llamar "montoneros". Al igual que sus antecesores, durante los años de la independencia, ellos debían buscar sus propias armas: lanzas, cuchillos, piedras, hondas, para una guerra cara a cara, cuerpo a cuerpo, auspiciada por uno de los ejércitos más modernos de Latinoamérica, pero ejecutada con los mismos procedimientos e instrumentos del siglo XVIII.

Desde luego, no era suficiente la protección o las dádivas para empujar a unos hombres a luchar contra otros. Intervinieron otros dos factores. El ejército estudió previamente la situación, descubriendo que ese mundo comunero era poco homogéneo y que, por el contrario, estaba atravesado por múltiples conflictos, que separaban a comunidades más prósperas de otras empobrecidas, a pastores de agricultores, a

hombres de altura de los que habitaban en valles cálidos; que existían antiguos litigios por tierras o rivalidades interétnicas: había que insertarse en esta historia anterior, descubrir en qué comunidades estaba Sendero y encontrar a sus inevitables rivales, donde siempre debían existir algunos ex conscriptos. Establecidas las primeras bases que después se llamaron de "contraguerrillas", en adelante se trataba de contraponer todo: los terrucos (sinónimo de senderista) contra los montoneros, la subversión frente a la defensa civil, los rojos y los que enarbolaban banderas blancas. Finalmente, otro componente fue el anticomunismo. Comunistas son, aparte de todos aquellos que tienen "ideas izquierdistas", quienes se interesan por los derechos humanos o cualquiera que discrepe con la estrategia militar. La norma fundamental es no tolerar la neutralidad. Si una comunidad no quiere ser arrasada, tiene que demostrar su lealtad y eso significa armarse y atrapar senderistas. No basta autoproclamarse: hay que ofrecer pruebas.

Pruebas: los siete muchachos presuntos senderistas (entre diez y quince años según las fotos) apresados y luego colgados en la comunidad de Huaychao el 21 de enero de 1983 (2). La estrategia comenzó a ejecutarse apenas llegó el ejército, pero es evidente que su diseño implicaba conocer el terreno, hacer indagaciones previas y que no fue producto de las circunstancias, sino una opción fría, trazada ante planos y en una oficina. En la masacre que vendría luego hubo premeditación y alevosía.

Ese mismo mes, enero de 1983, días antes de las ejecuciones en Huaychao, en la revista *Caretas* (Nº. 730) se publicó un informe oficial sobre los comandos del ejército que motivó la carátula de ese número: aparecía un oficial gri-

(2) Después, durante el juicio motivado por el caso Uchuraccay, surgieron informaciones y presunciones que varían la versión inicial de estos hechos: fuerzas militares y no comuneros de Huaychao sabían quiénes mataron a los siete jóvenes. Murieron abaleados, sólo cuatro de ellos en Huaychao; los otros en pueblos cercanos y luego trasladados a esa comunidad, donde los fotografió la revista *Caretas*.

Diez Canseco, Javier, *Democracia, militarización y derechos humanos en el Perú*, Lima, Servicios Populares, 1985, 2da. edición, p. 68.

tando, con rostro fiero, el cuchillo listo para embestir y completamente rojo en sangre: la cara, el pecho, los brazos, hasta el cabello. En las páginas interiores se reseñaba el entrenamiento. Una secuencia de fotos muestra a un hombre en medio de un paisaje serrano y en la puerta de una vivienda, con atuendos indígenas y provisto de una metralleta; en las dos fotos siguientes se aprecia cómo es atacado y muerto por un comando, que luego ingresa en la casa y mata a otros dos. Se supone que los muertos son senderistas, pero se visten como cualquier indio o mestizo, como cualquier habitante de la serranía. El reportaje ilustra de qué manera esta sociedad, al igual que muchas otras, entrena a gente para matar de la manera más rápida y eficaz, exenta de cualquier racionalidad. El realismo que requieren los entrenamientos obligó a vestir como indios y mestizos a los enemigos. El ejército entendió la lucha contra Sendero como una guerra interna. Antes y en otros lugares, los ejércitos francés o americano habían entendido de la misma manera la lucha contra la subversión en Argelia o Vietnam. La guerra interna es una guerra colonial, pero en el Perú, para bien o para mal, colonos y colonizados integran el mismo país.

Para alcanzar eficacia, la guerra interna requería de otros componentes. Los senderistas debían quedar aislados ideológicamente: no eran guerrilleros, ni combatientes por una causa política sino "terroristas", sinónimo de "criminales". ¿Qué trato se debía otorgar a los criminales? La sociedad necesita protegerse, para lo que hace falta extirpar los tumores que la amenazan. En el Perú no existe pena de muerte, pero desde 1980, en la práctica, comenzó a ejercerse contra encarcelados, prófugos y algunos criminales de reputada peligrosidad: caían en emboscadas tendidas por la policía. Si se mataba criminales en las calles de Lima, ¿por qué no podía hacerse lo mismo con los terroristas, allá lejos, en Ayacucho?

Otro procedimiento, utilizado previamente en las ciudades, fue la tortura. Preso, en el Perú, es casi sinónimo de torturado. En una localidad lejana a la zona de emergencia —en el puerto de Chimbote— una investigación entre encarcelados y ex presidiarios mostró que más de 90% habían sido tortu-

rados (3). Parece que en los puestos policiales desconocen otra manera de interrogar. Golpear a los prisioneros, sumergirlos en agua, colgarlos, incluso utilizar corriente eléctrica, son hechos que, de tan cotidianos, no causan asombro ni indignación en el Perú. Quizá por eso uno de los pocos estudios (y denuncias) sobre el tema ha sido escrito por un sacerdote de nacionalidad canadiense. Desde principios de 1980 estallan motines en las cárceles limeñas protestando por el creciente maltrato: el 13 de febrero se produce un motin en Lurigancho que deja 14 heridos graves; seis días después, 48 reclusos se declararon en huelga de hambre; desórdenes nuevamente en Lurigancho el 15 de agosto; huelga de hambre en protesta por las torturas el 6 de noviembre. 1981 comienza en las cárceles con un enfrentamiento entre grupos rivales en El Sexto que tuvo como saldo 32 muertos; el 30 de mayo se produce un motín en Lurigancho; otros dos, en ese mismo Penal, el 5 de julio y el 9 de setiembre, respectivamente.

Los procedimientos carcelarios practicados en Lima fueron transportados a la zona de emergencia desde los primeros días, pero su empleo se intensificó a partir de 1983. "Fui detenido en mi domicilio. Durante ese día me sometieron a torturas de diferentes modalidades: tina, la pita, pollo a la brasa". Es el testimonio de Calderón Rojas, un campesino ayacucho estos mismos procedimientos retornan a Lima. Se endurece el trato en las cárceles contra los presos comunes y los acusados por terrorismo. En diciembre de 1983 los reclusos de Lurigancho se amotinaron protestando contra supuestas medidas disciplinarias y se producen dos muertes entre reclusos sindicados como senderistas; once días después, ocho delincuentes y una monja (tomada como rehén) mueren acibillados en las afueras del Penal cuando intentaban fugar; en marzo del año siguiente, se amotinaron internos de El Sexto:

(3) De los detenidos en Chimbote, 92.8% "contestaron afirmativamente haber sido maltratados y/o torturados..." Renshaw, Ricardo, *La tortura en Chimbote*, Lima, 1985, p. 139.

(4) APRODEH, *Relación de presos*.

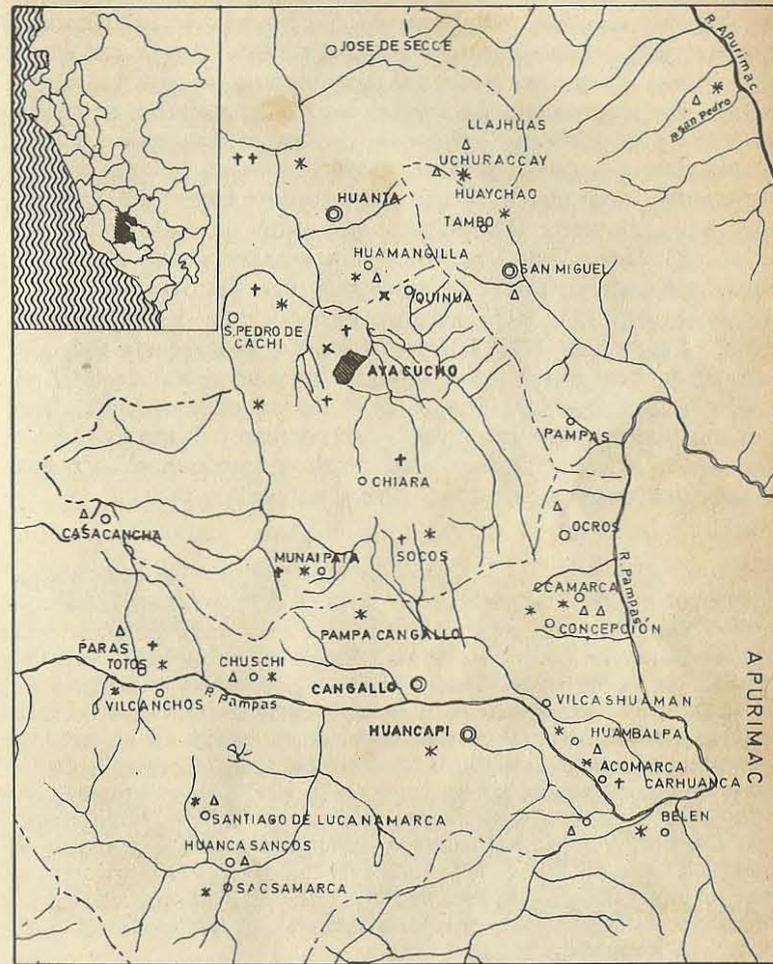
las fuerzas policiales acaban con el motín al costo de no menos de 20 muertos. Hacer uso indiscriminado de las armas, no dejar heridos, no admitir ninguna rendición ni ensayar ningún diálogo (sin importar siquiera la vida de los rehenes) fueron los rasgos que caracterizaron al comportamiento de la policía en estos casos.

Hasta el primer mes de 1983, por Ayacucho deambulaban unos personajes incómodos, provistos de máquinas fotográficas y lapiceros, que bajo el pretexto de informar se ofrecían como eventuales testigos. El ejército comenzó a hostigarlos. El 7 de enero los corresponsales establecidos en Ayacucho protestan por la forma violenta en que se les impide realizar su misión. Días después, el 26 de enero, 8 periodistas y un guía fueron asesinados en Uchuraccay. La versión del ejército es que se trata de senderistas o personas a las que se podía suponer como tales, porque habían viajado a ese pueblo con una bandera roja, exhibida repetidas veces por el jefe de la zona de emergencia, general Clemente Noel. Una comisión investigadora oficial, presidida por Mario Vargas Llosa, concluyó en un extenso informe —pero que dedicaba sólo unas pocas líneas al crimen— que murieron como consecuencia de un malentendido: los comuneros de Uchuraccay los confundieron con terroristas (5).

Pero esos comuneros de Uchuraccay estaban en contacto con las fuerzas policiales: habían sido visitados varias veces por los "sinchis", tenían vinculaciones con los de Huaychao; que unos días antes habían colgado a unos muchachos

(5) Esa línea dice textualmente: "La Comisión tiene la convicción relativa de que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo, y por una multitud a la que el miedo y la cólera, mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales". Informe de la comisión investigadora de los sucesos de Uchuraccay, Lima, 1983, p. 15. Dejemos de lado que unas fotografías reveladas posteriormente prueban la existencia de un diálogo previo al crimen. La comisión estuvo apenas unas pocas horas en Uchuraccay. Sus miembros llegaron en helicóptero y acompañados por oficiales del ejército. Es evidente que

VIOLENCIA POLITICA EN AYACUCHO (1983)



SÍMBOLOS

- † CEMENTERIOS CLANDESTINOS Y "BOTADEROS" DE CADÁVERES
- * ATAQUES DEL EJÉRCITO, POLICÍA O MONTONEROS
- △ ATAQUES DE SENDERO LUMINOSO
- CAPITAL DE DEPARTAMENTO. ○ CAPITAL DE PROVINCIA. ○ PUEBLO, CASERIO, HACIENDA.
- LIMITE DEPARTAMENTAL ——— LIMITE PROVINCIAL

senderistas; días después esos mismos comuneros de Uchuraccay atacaron a otros pueblos calificados como rojos. El 10 de febrero saquearon Balcón (6). La muerte de los periodistas fue útil en la estrategia antisubversiva: desde entonces, salvo unas pocas excepciones, ningún otro periodista saldría fuera de Huamanga. La versión sobre las muertes ocurridas en 1983 y en 1984 es, por eso, exclusivamente versión oficial. Comenzaron a publicarse notas de prensa en las que sólo se informaba lacónicamente sobre número de bajas: diez, veinte, cincuenta muertos, sin ninguna otra señal que no fuera el número. El "error" de los periodistas —haber salido al campo, buscar la noticia, tratar de conseguir una versión alternativa— no se repitió (7), salvo algunas excepciones. En febrero de 1983 el director de *El Diario de Marka*, José María Salcedo, recorre la ruta que habían seguido los periodistas desde Ayacucho a Uchuraccay. Fue el primero en observar el enfrentamiento entre comunidades. A su regreso a Lima publica el siguiente titular: "Guerra civil entre comunidades". En esos momentos parecía una concesión al sensacionalismo.

las condiciones descritas eran incompatibles con un "trabajo de campo" mínimamente serio y responsable. A falta de una investigación, sólo quedó reafirmar antiguas convicciones. La tesis de la violencia como malentendido no era nueva: Vargas Llosa la había esgrimido en su novela *La guerra del fin del mundo*. El otro estereotipo que emergió fue el imaginar a los hombres andinos en un mundo aparte, con otras reglas y leyes y a los que era menester mantener intocados: no se podía responsabilizar a nadie de Uchuraccay por esas muertes porque los campesinos eran considerados como "menores de edad". De esta manera contribuyeron a proteger a los aliados del comando militar. En la perspectiva que proporcionan los acontecimientos posteriores, la comisión de —por encima de la voluntad de cualquiera de sus integrantes— una función encubridora. Para una crítica de este informe me remito a Montoya, Rodrigo, "Otra pista para entender lo que pasó en Uchuraccay", *La República*, 21.01.84

(6) *Amnistía Internacional - Perú*, 1985, p. 17.

(7) *Caretas*, 07.02.83, p. 15: "Todo parece indicar que el primer error —que de ninguna manera exculpa los de otros— fue cometido por los propios colegas que emprendieron la expedición". Error es un eufemismo para hablar de nueve muertos.

El 17 de marzo se organiza, de manera oficial, el primer agrupamiento de licenciados de las Fuerzas Armadas (unos mil hombres), en las alturas de Huanta, en las proximidades de Uchuraccay y Huaychao. Se despliega paralelamente una especie de guerra psicológica en la que se busca identificar a Abimael Guzmán y los senderistas con vampiros: pistacos a los que se debía matar sin compasión para evitar que el mal se propale. Nuevas comunidades se lanzan contra las bases de Sendero (8). En Lucanamarca se cuelga a seis jóvenes. Al igual que Uchuraccay, se trataba de una comunidad ganadera, relativamente próspera. La respuesta senderista tarda, pero al parecer llega en abril: según una inevitable versión oficial, entre 45 y 67 campesinos de esa localidad fueron muertos por 40 senderistas y 100 campesinos. Dos días después, en la margen opuesta del río Pampas, entre el 5 y 16 de abril el ejército ocupa la comunidad de Totos: sus habitantes denuncian ante la Fiscalía de la Nación la práctica de torturas, simulacros de fusilamientos y la muerte de ocho campesinos. En Huancasancos, Sendero Luminoso ejecuta a 30 campesinos. En Chuschi matan al alcalde. La comunidad de Espite —en la misma región del Pampas— es atacada por una patrulla campesina que viene de la comunidad cercana de Urancancha: esta vez entregan detenidos a las Fuerzas Armadas pero éstos después integrarán la lista de desaparecidos. La réplica de Sendero llega a Lima en la forma primitiva del terrorismo: el 11 de julio es dinamitado el local principal del partido de gobierno. La guerra prosigue en las alturas de Huanta y Tambo. En Santa Rosa se informa el 4 de octubre que doce senderistas murieron a manos de fuerzas del ejército y paramilitares. Cuando éstos dejan el pueblo, regresa Sendero y mata a 7 campesinos colaboracionistas: ellos tampoco admiten la neutralidad. Total: 19 muertos. Así proseguirá la guerra en los meses siguientes. Entre el 9 y el 19 de julio de 1984 las co-

(8) La información que utilizamos se basa en el material periodístico ordenado y codificado en el Banco de Datos de DESCO, en los Informativos Semanales de esta misma institución, en la lectura de periódicos y revistas (en particular *Caretas*), en los datos reunidos por instituciones como APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) y Amnistía Internacional. Aldo Panfichi me ayudó a reunir esta información.

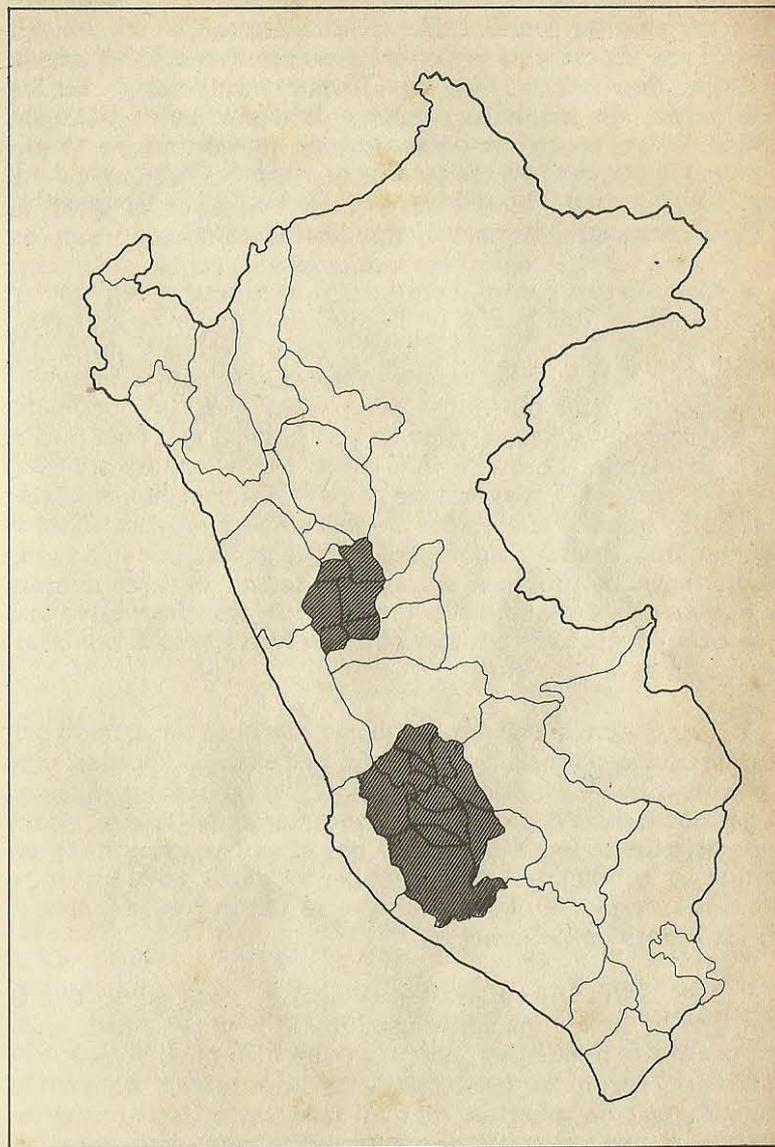
comunidades de Tanta, Huaracayocc, Manzanayocc, en el distrito de Concepción, provincia de Cangallo, fueron atacadas por fuerzas militares y comuneros de Ocros, Chumbes y Ccamarca (capitales de distrito y más pobladas que las otras). Se denunciará después la desaparición de seis personas y la destrucción y saqueo de bienes. Una historia similar ocurre en la comunidad Ccarhuace, que entre setiembre y diciembre de 1984 fue atacada tres veces por infantes de marina y comuneros de Huamanguilla.

La réplica de los “terrucos” no se dirige, al parecer, contra las Fuerzas Armadas, parapetadas por lo general en sus guarniciones, sino contra aquellos que forzada o voluntariamente son colocados en la primera línea de fuego, y de esta manera la guerra de Sendero contra el Estado se convierte en una atroz guerra civil, en la que se enfrentan unas comunidades contra otras. La demarcación no es pobres contra ricos, o indios contra mistis, sino, como hemos visto, los de Manzanayocc contra los de Ocros. El agua se convierte en un pantano.

Los conflictos entre comunidades eran bastante conocidos en la región. Chuschi, donde Sendero inició sus acciones, estaba separada de la comunidad vecina de Quispillacta apenas por un riachuelo; sin embargo, eran rivales y antagónicas. “La rivalidad —escribía Díaz Martínez en 1969— es muy antigua y originada por la posesión de tierras comunales de las punas. Ambas comunidades dicen que el pequeño cerro que divide sus pastos les pertenece. Lo cierto es que jamás se han podido establecer los verdaderos linderos. En el año de 1960 se produjo un choque armado entre ambos bandos y murieron algunos comuneros”.

El ejército sólo tiene que esperar que Sendero Lumino se desangre. Disponiendo casi solamente de información oficial, es difícil lanzar un juicio sobre su eficacia. Los comuneros de Iquicha estuvieron en el bando vencedor en 1814; no sucedió lo mismo diez años después. ¿Y ahora? Pero si vamos más allá de discutir quién vence y quién pierde, podemos recordar la cifra de más de 4,000 muertos entre civiles y senderistas frente a 24 bajas militares, la gran mayoría, como es obvio, soldados. No importa el costo social de la guerra. Es más: ella implica, como fue planteada por los jefes mi-

PROVINCIAS BAJO ESTADO DE EMERGENCIA Y CONTROL MILITAR (1984)



litares, una cantidad impresionante de muertos para literalmente enturbiar las aguas. En esta guerra no existe distinción entre combatientes y civiles. Tampoco interesan las edades o el sexo. Pero las evidencias disponibles permiten afirmar que la mayoría de víctimas han sido jóvenes campesinos. De los 345 presos de Izquierda Unida e Independientes (julio de 1985), 60% procedían de la zona de emergencia; en términos ocupacionales, 48% eran campesinos y 12% estudiantes; 43% tenían 30 ó menos años. De los 427 desaparecidos, 22.7% eran agricultores y 18.5% estudiantes.

Comuneros contra comuneros: campesinos en uno y otro bando en una guerra en la que, en el mejor de los casos, sólo podemos conocer la identidad de la víctima y no la del victimario. Esta versión parece compaginarse con el desenvolvimiento de otras rebeliones campesinas. Pero la repetición, en historia, no es necesariamente una prueba; más bien puede ser lo contrario. Lo que hemos dicho —conviene insistir otra vez— se basa en la mayoría de casos en informaciones oficiales. En lo que se refiere a los ataques de Sendero Luminoso a las comunidades no disponemos, por lo general, de una fuente diferente. Se juntan el silencio senderista, el cerco militar, la abstinencia de periodistas o científicos sociales —salvo una que otra excepción— a viajar por esos territorios, donde ni siquiera entra la Cruz Roja.

Una guerra silenciosa. En el caso de Lucanamarca, el primer ataque senderista a un pueblo, por ejemplo, aunque existiría un volante admitiendo el ataque, el número de muertos y heridos indicado procede exclusivamente de *Caretas*, en un reportaje desde luego permitido por el comando militar y en el que las condiciones para recopilar los datos, en el mejor de los casos, serían similares a las que se dieron con la comisión investigadora en Uchuraccay.

Las cifras de muertos que hemos conseguido reunir son, por lo tanto, una aproximación a la realidad y nada más. En ocasiones pueden ser mayores o también pueden estar disminuidas, según las necesidades de la estrategia militar. El número real de muertos, de otro lado, es un factor prescindible para una estrategia que ante dificultades para enturbiar

las aguas ha optado sin miramiento alguno por la desertificación. Suprimir el agua. Pueblos sin jóvenes, pueblos abandonados, habitados por huérfanos. Huambalpa tenía cerca de 3,000 habitantes; en marzo de 1983 sólo quedaban 42 ancianos. Al campesino que no era senderista pero que tampoco quería ser montonero, si esperaba conservar su vida, sólo le quedaba huir lo más pronto posible e integrarse a algún barrio de refugiados en Ica o Lima (alrededor de 10,000 personas a la fecha), a no ser que una fe ciega —como la de algunos evangelistas— ayudara a ese hipotético campesino a permanecer y desafiar todas las tribulaciones consiguientes (9).

¶ Pero la guerra no transcurre únicamente en Ayacucho. Hasta el momento 26 provincias se encuentran en estado de emergencia. Salvo la última en haber sido declarada como tal, Mariscal Cáceres, todas las demás corresponden a la sierra central (departamentos de Pasco y Huánuco) y sierra sur (Huancavelica, Ayacucho y Apurímac). Son espacios donde la población campesina es dominante y donde persisten formas andinas de organizar la producción. Entre el centro y el sur se encuentra el valle del Mantaro —donde José María Arguedas encontró gérmenes de una burguesía campesina—, que parece mantenerse al margen. El área del sur puede superponerse al mapa del Taqui Onkoy en el siglo XVI. Pero lo que nos interesa es ocuparnos de las dimensiones del fenómeno “senderista” y de la lucha antisubversiva. Aunque el epicentro de este sismo social persiste en Ayacucho, su propalación abarca de manera inmediata 88,989 Km² y a una población de 1'496,714 habitantes. En los departamentos del sur, específicamente, 70,795 Km² y 995,255 habitantes.

Las palabras siguieron un itinerario paralelo a las muertes. “Senderista” fue sustituido por “terrorista”, y esta palabra, con el tiempo, fue sinónimo de “ayacuchano”, que a su vez equivalía a cualquiera que fuese indio o mestizo, anduviera mal vestido, usara deficientemente el castellano... Decirse ayacuchano era admitirse incurso en la ley antiterrorista. De esta manera la guerra, al terminar 1984, se convirtió en una arremetida del lado occidental del Perú contra su vertien-

(9) Salcedo, José María “Zona de emergencia: el proceso de la Paz” En *Quehacer* Nº 37 Lima, DESCO, 1975, pp. 70-85.

te andina. Las cifras de muertos, heridos y desaparecidos traslucen la realidad, muchas veces ocultada, de un país donde los ciudadanos tienen varias categorías (unos son más iguales que otros) y donde las relaciones entre los hombres están contaminadas por el racismo: un problema tan antiguo y tan profundo como el de la violencia: Si en medio de un sistema proclamadamente democrático, con Parlamento, Iglesia, universidades, colegios profesionales en plena actividad, se ha podido utilizar la tortura, “desaparecer” a más de 1,000 peruanos, matar indiscriminadamente, propalar el miedo y el terror que obliga a muchos otros a emigrar, es porque en el Perú de 1985 sigue siendo válido el título de un cuento de Julio Ramón Ribeyro: “La piel de un indio no cuesta cara”. Todo esto sucede allá lejos, en Ayacucho o en Huánuco, donde los muertos son números y no personas con las que nos identifiquemos.

La violencia política trasluce dos elementos que componen el entramado cotidiano de la sociedad peruana: el autoritarismo y el racismo. No estamos ante una muerte sino ante varios miles de muertos, que no han sido resultado del azar o de circunstancias trágicas, sino de opciones libres y conscientes. Hemos querido demostrar que el volumen de muertos varió sustancialmente en conexión con el ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso. Se eligió una determinada manera de combatir sin ignorar cuál podría ser su costo social y contando con el sustento ideológico de la doctrina de la “seguridad nacional”: la defensa de una sociedad frente a un agresor externo. Pero ningún discurso ideológico funciona en el vacío. Esa doctrina maniquea que pretende extirpar el mal desde su raíz, engarzó con las prácticas carcelarias y policiales que existían desde antes en el país, y con el racismo silenciosamente compartido. La dimensión de los acontecimientos —el volumen de muertos, la cantidad de soldados y oficiales directa o indirectamente implicados— obliga a que la justificación se convierta en un programa. La violencia represiva multiplica y propala al autoritarismo y al racismo. Supuestos defensores de la democracia acaban impulsando las tendencias más claramente dictatoriales. Primero pretenden ocultarse negando sus graduaciones, recurriendo a seudónimos y cubriendo sus rostros, pero cuando se ven obli-

gados a salir ante el público, se colocan a la ofensiva y la solución inevitable y local se convierte en una alternativa para el país. En Huamanga y Huanta emergen, de esta manera, los gérmenes de un autoritarismo que amenaza no sólo a los ayacuchanos, sino a todos los habitantes de este país que no estén dispuestos a secundar esa opción.

El autoritarismo, en sus inicios, requiere de la complicidad y la tolerancia. Presentar las muertes en Ayacucho como producto del malentendido, como hechos incomprensibles, resultado de esa trágica amalgama entre blancos e indios que es el Perú, ha sido uno de los logros de la derecha, combinando el discurso aparentemente “serio” y “científico” de la Comisión Uchuraccay, con los titulares periodísticos que reducían los muertos a números absolutamente abstractos e impersonales. ¿Estas muertes —nos preguntamos— habrían sucedido de haber mediado una reacción más vigorosa de la sociedad civil? La neutralidad y el silencio eran prerequisites de la estrategia militar. Los consiguieron. El Parlamento, interfiriendo cualquier comisión investigadora. El periodismo, acatando la censura, admitiendo una autocensura sobre las informaciones. Muchos dirigentes de izquierda conviviendo con los torturadores con excepciones como las de Javier Diez Canseco (10) o Jorge del Prado. La Iglesia ha hecho lo suficiente como para que no se la incrimine, pero sin preocuparse por su eficacia.

Los derechos humanos no constituyen una preocupación vertebral en la izquierda “realmente existente”. Para demostrarlo basta con revisar los pronunciamientos, los discursos, las revistas y ver qué se ha escrito y quiénes han escrito sobre este tema. Pero esto no quiere decir que los derechos humanos no preocupen a sectores significativos de la sociedad peruana: un grupo de curas y monjas, algunas parroquias, pobladores de barriadas y obreros, personas comunes y corrientes que se vinculan con Amnistía Internacional, que organizan una oficina como APRODEH (Asociación Pro Dere-

(10) La labor desempeñada por Javier Diez Canseco está condensada en el libro, antes citado, *Democracia, militarización y derechos humanos en el Perú, 1980-84*.

chos Humanos) o un comité contra la tortura y la violencia. El problema es que frente a la cantidad de muertos y las dimensiones de la violencia política, no conforman un verdadero movimiento social, una corriente que tenga la fuerza necesaria para contener y revertir el autoritarismo. La lucha contra la tortura no es una bandera nacional. Tenemos que recuperar el asombro y la indignación ante los muertos y los desaparecidos. Por el contrario, éste es un país en el que los métodos más crueles de la represión anticomunista son defendidos públicamente y sin vergüenza. Lo ha hecho el general Cisneros elogiando a sus colegas argentinos.

El tema de los derechos humanos no es exclusivo de la izquierda o del pensamiento progresista. A muchos otros podemos reclamar por su olvido. En el Perú demasiados antropólogos e historiadores han edificado su prestigio intelectual, sus cursos y sus libros sobre el mundo andino y los hombres andinos. ¿Qué han dicho cuando —en un escenario privilegiado para sus investigaciones— los han dejado sin objeto de estudio? Frente a masacres en África u Oceanía, en otras ocasiones han sabido pronunciarse antropólogos ingleses y franceses ¿Y los antropólogos peruanos? Apenas un pronunciamiento de los estudiantes que asistieron al Primer Congreso Nacional de Investigaciones en Antropología (noviembre, 1985). Lo mismo se puede decir sobre historiadores o sociólogos.

Admitamos la confusión que pudo existir entre los miembros de la Comisión Uchuraccay. Todos ellos saben escribir. Tienen acceso a revistas y periódicos. ¿Qué han escrito —para mencionar a mis amigos más cercanos— Max Hernández o Juan Ossio sobre estas muertes ayacuchanas?

Hace falta que nos reencontremos todos con la ética. Asumir nuestras responsabilidades. Viene a la memoria el caso Pásara. En los años que hemos venido evocando, entre 1980 y 1984, este intelectual se distanció de la izquierda: de *El Caballo Rojo* pasó a la revista *Caretas*; se entusiasmó con el informe Uchuraccay y lo puso por escrito, pero después no se tapó los ojos ante la "guerra sucia". Todo lo contrario. Supo señalar a quienes consideraba como los responsables: "Así el

fracaso de los políticos y la subsiguiente intervención militar han dado lugar no sólo al uso de la violencia por las fuerzas militares y policiales, sino que éstas, a su vez, han delegado ese inmenso poder (...). Si la guerra interna adopta este curso, los resultados pueden ser aún más terribles que aquéllos ya vistos en Centroamérica. Cuando el Estado autoriza la privatización de la violencia, entonces ha legalizado el caos" (11). Esto fue escrito en febrero de 1983. Sigue vigente.

El ámbito de los derechos humanos se circunscribe a la relación entre el Estado y los ciudadanos: existen para proteger a éstos de los abusos del poder. Cualquier crimen o imposición no puede ser calificado como tal de violación de los derechos humanos. Pero esto no significa ocultar y minimizar las acciones terroristas. Sendero Luminoso es una organización guerrillera, que ha conseguido movilizar a contingentes campesinos y conformar milicias, pero que también emplea —a veces indiscriminadamente— el terror como instrumento político. Mencionamos líneas atrás las ejecuciones de autoridades o los atentados contra locales partidarios. Estos atentados han proseguido sin que sus actores mediten siquiera en el costo de vidas no combatientes que implican. Entre las víctimas también han estado campesinos y anónimos militantes de izquierda. El terror es una forma descarnada de autoritarismo. Sustituir el convencimiento por el miedo, la voluntad de las masas por la imposición vertical. La amenaza dictatorial no viene entonces solamente desde arriba, desde el Estado y sus fuerzas represivas; emerge paralelamente desde las bases de la sociedad. También en este terreno hace falta conjurar el peligro.

La violencia indiscriminada, de uno y otro lado, se propala en un ambiente favorable. Este ambiente está enmarcado por el escaso valor de la existencia humana en un país con tan alta tasa de mortalidad infantil, con limitadas esperanzas de vida y con una frecuencia igualmente alta de accidentes y catástrofes, a todo lo cual se debe añadir que el uso privado de la violencia constituye una forma habitual en el dominio de unos hombres sobre otros. Es el legado colonial de dos insti-

(11) *Caretas*, 07.02.83, N.º 734, p. 31.

tuciones: la servidumbre de los indios en las haciendas y la esclavitud del negro en las ciudades. El puente entre ese pasado —no tan lejano como quisiéramos— y el presente está dado por los servidores domésticos: sustento de los hogares de clase media alta, de mestizos y criollos, relación laboral donde cualquier trabajador queda excluido de sus derechos más elementales y a merced de la voluntad de su patrón.

El país en el que ha hecho su aparición la peculiar guerrilla de Sendero Luminoso no es sólo un país pobre y atrasado; es también un país en el que las clases están enfrentadas silenciosamente, desde hace siglos (como lo señalan José María Arguedas y Alberto Escobar), y donde los hombres están abismalmente separados por sus ingresos pero también por su situación étnica (12). En estas condiciones la violencia puede aparecer como el único medio para romper una situación de dominio total. En el lado opuesto, no se vislumbra una respuesta diferente frente a la insurrección, que no sea el exterminio.

Algunos científicos sociales han imaginado al Perú como un país donde el consenso cuenta con un amplio terreno. Pero en este país, desde mucho tiempo atrás, funciona siempre más de un código. De un lado están las leyes, las instituciones, el Parlamento, las elecciones; del otro persisten las prácticas cotidianas, los usos y las tradiciones: es aquí donde predomina la violencia, muchas veces en su más descarnada expresión física.

El escenario no justifica a los actores. El trasfondo histórico y social de violencia en la sociedad peruana no explica a los desaparecidos y los "botaderos" de cadáveres. Siempre hay márgenes de opción. Ningún rol viene impuesto de antemano. El torturador ha escogido ese papel. En la violencia política, como en cualquier hecho, existen varias instancias de responsabilidad: personales, institucionales, sociales. Los ejecutores de los crímenes, quienes los secundan, aquellos que les otorgan el respaldo ideológico, los que guardan silencio y los toleran.

(12) He discutido la relación entre Sendero Luminoso y la cultura andina en el ensayo "El Perú hirviendo de estos días..."

¿Qué repercusiones tendrá Ayacucho para la convivencia futura en el Perú? Difícil responder a esta pregunta. En otros lugares y en otras épocas, los alemanes o los argentinos han podido argumentar después que no conocían los campos de concentración, las cámaras de gas o las casas de tortura. En el Perú no podríamos decir lo mismo.

Nuestras cifras se detienen en diciembre de 1984. Al año siguiente se produce un cambio de gobierno. ¿Cambió la estrategia militar? El descubrimiento de nuevas masacres y tumbas lleva a que el Ejecutivo deponga drásticamente a algunos jefes militares y a que se forme una llamada Comisión de Paz. Hechos prometedores pero que no fueron más allá. Ante la mirada de todos, las fuerzas policiales dieron muerte en la cárcel de Lurigancho a más de treinta senderistas. La comisión nacía para dialogar, pero uno de los interlocutores era suprimido de una manera demasiado simbólica: quemados, los cuerpos terminaron hacinados, imposibles de ser identificados, reducidos a bolsas y números. Todo esto sucedió ante la impotencia de los miembros de la Comisión de Paz, impedidos por los funcionarios carcelarios y policiales de cumplir con su supuesta función.

Al igual que en casos anteriores, la réplica senderista ha contribuido únicamente a incrementar la violencia ciega e irracional. Respuesta refleja ante el estímulo, especie de reacción pavloviana que los conduce ciegamente a cometer atentados punitivos contra los locales del partido de gobierno. En estas circunstancias es difícil que la razón persista sobre las tendencias más oscuras. De allí lo excepcional del discurso del senador aprista Armando Villanueva, quien en el cementerio y frente a la tumba de sus compañeros caídos, se abstuvo de reclamar venganza. Actitud esperanzadora, aun cuando Villanueva dejara de prestar el apoyo que antes de las elecciones otorgaba a la defensa de los derechos humanos.

De una comisión a otra, de la de Uchuraccay a la de Paz, lo que está en juego es las difíciles relaciones entre los intelectuales y el poder. Del menosprecio y el olvido tradicional, el Estado ha comenzado a reclamar el concurso y la incorporación de algunos escritores y artistas. La Comisión

Uchuraccay condensó un discurso sobre la sociedad peruana: una determinada visión del país. Fue algo más que una coartada. Los medios de comunicación ayudaron a propalar esa imagen. La nueva comisión, quizá por sus conflictos internos, no ha alcanzado a desempeñar una función similar. Faltó, sigue faltando, una comisión investigadora que no nazca designada desde arriba, dependiendo umbilicalmente del Estado, sino generada desde abajo, entre los propios intelectuales, alejada de cualquier tentación cortesana. Siempre existen excepciones, pero se reducen a casos individuales como el de Rodrigo Montoya y su polémica con la Comisión Uchuraccay (13).

¿Por qué no ha podido conformarse un grupo de intelectuales que asumieran la tarea de investigar por su propia cuenta estos sucesos? Cuando transcurran los años y algún historiador escriba sobre esta guerra silenciosa, se planteará inevitablemente una pregunta similar. No será fácil encontrar una respuesta existiendo, aparte de las universidades, institutos y centros de investigación que agrupan a los intelectuales y en apariencia les posibilitan una actuación colectiva.

Tras la Comisión de Paz lo que parece existir es el proyecto de ganar tiempo. El actual régimen cree —a pesar de la votación y la popularidad— que no dispone de la fuerza suficiente como para domeñar al ejército y hacerle sentir que el poder civil está por encima del poder militar. Paralelamente confía, de manera muy ingenua, que el traslado de capitales al campo y los proyectos microrregionales pueden rendir frutos a corto plazo, atenuando la pobreza campesina, impulsando el desarrollo rural y haciendo innecesaria a la violencia senderista y por lo tanto a la intervención de los militares. Estos, por su parte, observan el escenario nacional mientras prosiguen actuando en la zona de emergencia, reclamando un mayor respaldo del gobierno. Nada ha variado sustancialmente. Precisemos. Hay en realidad un cambio revelador: cada vez se habla menos de estos temas. La censura se ha tornado más rígida. La autocensura —con el oficialismo reinante en la

(13) Un precedente importante podría ser la "Comisión de los derechos de la persona y construcción de la paz", pero lo que reclamamos es un organismo que investigue, busque deslindar lo que está ocurriendo, elabore un informe y trate de convocar con eficacia a instituciones y grupos para detener la masacre y la amenaza totalitaria.

gran mayoría de periódicos y revistas— más eficaz. El silencio y la complicidad han aumentado. El cerco que envuelve a esos trágicos pueblos de la sierra se ha vuelto más denso.

ANEXO

VIOLENCIA POLITICA
(cifras)

| Años | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Totales |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| Atentados | 219 | 715 | 891 | 1123 | 1760 | 4708 |
| <i>Muertos</i> | | | | | | |
| Policía | -- | 6 | 30 | 51 | 54 | 141 |
| Ejército | -- | -- | 1 | 8 | 15 | 24 |
| Autoridades | -- | -- | 8 | 23 | 34 | 65 |
| Civiles | 3 | 4 | 65 | 802 | 1,042 | 1,916 |
| Senderistas | -- | 1 | 47 | 1,398 | 959 | 2,405 |
| TOTAL | 3 | 11 | 151 | 2,282 | 2,104 | 4,551 |
| <i>Heridos</i> | | | | | | |
| Policía y Ejército | 2 | 8 | 101 | 135 | 111 | 357 |
| Autoridades | -- | -- | 5 | 8 | -- | 13 |
| Civiles | 7 | 10 | 52 | 224 | 279 | 572 |
| Senderistas | -- | -- | 19 | 5 | 55 | 79 |
| TOTAL | 9 | 18 | 177 | 372 | 445 | 1,021 |
| Desaparecidos(*) | | | | 245 | 168 | 414 |
| Fosas y Botaderos(*) | | | | 133 | 183 | 316 |
| Presos(**) | | 23 | 46 | 81 | 105 | 265 |

(*) Cifras aproximadas.

(**) Únicamente de Izquierda Unida e Independientes.

Fuentes: Amnistía Internacional, APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), *El Comercio* (07.04.85), *Hoy* (19.05.85), *El Nacional* (20.04.85), Banco de Datos (DESCO).